

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 30 del Proyecto de Ley 280 de 2020 Cámara – 158 de 2020 Senado “Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat”, el cual quedará así:

ARTÍCULO 30. PROCEDIMIENTO PARA PLANES PARCIALES. Modifíquese el artículo 27 de la Ley 388 de 1997, el cual quedará así:

"Artículo 27. Procedimiento para planes parciales. Para la aprobación y adopción de los planes parciales de que trata la presente Ley, se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:

1. Los proyectos de planes parciales serán elaborados por las autoridades municipales o distritales de planeación, por las comunidades o por los particulares interesados, de acuerdo con los parámetros que al respecto determine el plan de ordenamiento territorial o el Macroproyecto de Interés Social Nacional cuando este último así lo prevea.

2. La oficina de planeación municipal o distrital, o la dependencia que haga sus veces, revisará el proyecto de plan parcial con el fin de verificar el cumplimiento de las normas tenidas en cuenta para la formulación del plan y pronunciarse sobre su viabilidad. Para la aprobación del proyecto de plan parcial, la oficina de planeación contará con un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación completa del proyecto, prorrogables por treinta (30) días hábiles más ~~por una sola vez, so pena que se entienda aprobado en los términos en que fue presentado mediante la aplicación del silencio administrativo positivo.~~

Respecto de la radicación incompleta del proyecto de plan parcial, aplicará lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la ley 1755 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya.

3. Una vez que la oficina de planeación municipal o distrital, o la dependencia que haga sus veces, apruebe el proyecto de plan parcial, mediante acto administrativo ~~u ocurra el silencio administrativo en los términos del numeral 2,~~ éste se someterá a consideración de la autoridad ambiental competente, cuando se requiera según lo previsto en el reglamento del Gobierno Nacional, a efectos de que conjuntamente con el municipio o distrito acuerden los asuntos exclusivamente ambientales, para lo cual dispondrán de quince (15) días hábiles prorrogables por un término igual. Este acuerdo debe realizarse con base en el acto administrativo de viabilidad y en las normas ambientales vigentes al momento de su expedición.

Los resultados de este proceso se consignarán en un acta que deberá ser suscrita por los representantes legales correspondientes o sus delegados.

En la concertación ambiental de planes parciales de iniciativa particular, las partes podrán solicitar a los interesados que lo hayan elaborado la sustentación del mismo.

Cuando no se logre la concertación entre el municipio o distrito y la autoridad ambiental competente, la oficina de planeación municipal o distrital procederá a archivar el proyecto de plan parcial, sin perjuicio de que el interesado pueda efectuar los ajustes que consideren pertinentes y reiniciar el trámite de concertación ambiental, dentro de un término máximo de seis (6) meses siguientes a su archivo.

Cuando se trate de planes parciales que desarrollen los Macroproyectos de Interés Social Nacional, si la autoridad ambiental no se pronuncia definitivamente dentro del término señalado en este artículo, le corresponderá al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible decidir sobre los asuntos ambientales para lo cual dispondrá de un término máximo e improrrogable de quince (15) días hábiles contados a partir del recibo del respectivo expediente.

4. Durante el período de revisión del proyecto de plan parcial y del acuerdo de concertación ambiental se surtirá una fase de información pública, participación ciudadana donde los propietarios y vecinos podrán proponer sus recomendaciones y observaciones, que serán tenidas en cuenta por la administración municipal o distrital.

5. Una vez surtidas las etapas anteriores y dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del proyecto de plan parcial, mediante acto administrativo ~~expreso o ficto~~ o a la concertación ambiental, cuando sea el caso, el alcalde municipal o distrital procederá a adoptarlo mediante decreto.

Parágrafo 1°. El incumplimiento de los términos previstos en el presente artículo para pronunciarse por parte de las autoridades competentes constituirá falta grave en cabeza del director y funcionarios responsables de la respectiva entidad.

Parágrafo 2°. Las autoridades ante las cuales se deban adelantar trámites urbanísticos con posterioridad a la adopción del plan parcial estarán obligadas a emitir sus conceptos o permisos con base en lo aprobado en el plan parcial y en su documento técnico de soporte. En todo caso, desde la aprobación del plan parcial se deberán tener definidos y resueltos todos los impactos de la operación sin que se requiera para su ejecución o desarrollo la aprobación de instrumentos de planificación complementarios.

H.R. Ángela Robledo

Parágrafo 3°. La vigencia del plan parcial se señalará en el decreto en que se adopte y no se alterará por el hecho de que se modifique el Plan de Ordenamiento Territorial, salvo que los propietarios de los predios se acojan, por escrito a la nueva reglamentación.

Parágrafo 4°. El ajuste o modificación de planes parciales, en caso de requerirse, se efectuará teniendo en cuenta el procedimiento definido en este artículo, en lo pertinente y, únicamente, las instancias o autoridades a cuyo cargo se encuentren los asuntos objeto del ajuste necesario para el desarrollo del respectivo plan. La solicitud de determinantes, en caso de realizarse, únicamente se podrá circunscribir a los aspectos sobre los cuales se solicite de manera expresa y escrita la modificación, y se sustentarán en la misma reglamentación con que fue aprobado el plan parcial, salvo que los interesados manifiesten lo contrario.

~~Parágrafo 5°. Si durante el término que transcurre entre la expedición del acto administrativo de viabilidad de un proyecto de plan parcial y su adopción, se produce un cambio en las normas urbanísticas que afecten el proyecto sometido a consideración del Municipio o Distrito, el solicitante tendrá derecho a que el plan se estudie y apruebe con base en la norma urbanística vigente al momento de la expedición del referido acto administrativo. Lo anterior sin perjuicio de que el solicitante pueda acogerse a la nueva normatividad.~~

~~Parágrafo 6°. Si durante el término que transcurre entre la expedición del acto administrativo de viabilidad de un proyecto de plan parcial y su adopción, se suspende provisionalmente por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el plan de ordenamiento territorial con base en el cual se formuló el plan parcial, el solicitante tendrá derecho a que el plan se estudie y apruebe con base en las normas vigentes al momento de la expedición del referido acto administrativo, siempre y cuando en la providencia que adoptó la suspensión provisional no se haya incluido disposición en contrario."~~



Ángela María Robledo
Representante a la Cámara
Colombia Humana



María José Pizarro
Representante a la Cámara
Coalición Lista a la Decencia

JUSTIFICACIÓN:

El gobierno nacional los ha querido equiparar las licencias ambientales, las licencias urbanísticas y los planes de ordenamiento territorial y los planes parciales a un asunto de reducción de trámites similares a la exigencia de sellos, documentos públicos accesibles a la entidad que los solicita o de cédula ampliada al 150.

Sin embargo, esos procedimientos administrativos de licenciamiento ambiental, urbanístico y de los POT involucran derechos colectivos y sociales de protección constitucional como el derecho al ambiente, a la protección de áreas de especial importancia ecológica, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el derecho a los servicios públicos o el derecho a la seguridad y prevención de desastres, todos ellos relacionados con el derecho a una vivienda adecuada en condiciones de dignidad, que es uno de los objetivos del proyecto de ley bajo discusión.

No es un asunto entre dos partes, como lo asume equivocadamente el proyecto de ley, sino un mecanismo de garantía de derechos colectivos y sociales ante la ciudadanía.

En muchos casos los tiempos que toman los procedimientos para declarar la viabilidad y aprobar un plan parcial tienen que ver con deficiencias en los planes de ordenamiento que aprueban suelo de expansión urbana que excede las necesidades de crecimiento del municipio, sin estudios técnicos de riesgo o sin establecer de manera simultánea las condiciones de construcción de las infraestructuras.

Por tanto, el proceso de elaboración de un plan parcial se torna complejo porque implica una revisión detallada de varios temas que no es posible abordar en el plan de ordenamiento. El plan parcial es el principal instrumento contemplado en la ley para concretar los objetivos, principios y contenidos de la función pública del urbanismo, que la ley y la Constitución imponen a las autoridades municipales. Estamos hablando de asuntos de trascendental importancia, como la infraestructura de servicios públicos y viales, la prevención de desastres, la calidad de vida y la vivienda digna. Imponer presión para que se aprueben pronto no necesariamente lleva a resultados adecuados.

Por tanto, es procedente hacer extensivos los argumentos contemplados en la sentencia C-431/00, que declaró inconstitucional el silencio administrativo positivo dentro del procedimiento de aprobación del plan de ordenamiento territorial, a los planes parciales.

H.R. Ángela Robledo

Cuando se reducen los plazos y las exigencias de los planes parciales y los POT no se está castigando a la entidad municipal o distrital de planeación, sino a la ciudadanía que puede verse sometida a condiciones de vida contrarias a las planteadas en los objetivos de la ley 388 y el proyecto de ley que se discute.

En este sentido, las eliminaciones que se proponen en esta proposición buscan garantizar que estos pasos que establece la ley para la aprobación de los planes parciales no se conviertan en trámites que pueden ser objeto del silencio administrativo positivo o medidas para reducirlos de tal forma que se vean afectados los derechos colectivos y las garantías de participación ciudadana y de protección ambiental.

Sobre el silencio administrativo en esta materia la Corte Constitucional al declarar inexecutable el mismo frente a la concertación ambiental de los planes de ordenamiento territorial POT dijo:

“Los efectos perversos que podría originar la aplicación del silencio administrativo en relación con el tema ambiental -como es el de omitir el estudio ecológico-, no permiten reconocerle verdadera legitimidad a los objetivos que por su intermedio se pretenden hacer valer: la celeridad y eficacia en el desarrollo de la función administrativa, quedando en entredicho la razonabilidad y proporcionalidad de esta medida legislativa. Si bien es cierto que la utilización del silencio administrativo positivo permite contrarrestar el potencial riesgo de retraso que puedan llegar a sufrir los POT en el proceso de su aprobación, es evidente que el mismo se satisface a costa del daño irreversible y permanente que puede sufrir el medio ambiente y, por contera, los derechos a la vida y a la salud de los coasociados como consecuencia de no asumirse una política institucional seria y uniforme que asegure un manejo sostenible del ecosistema. Para la Corte, el hecho de que se le reconozca plena garantía a la protección ambiental, permitiendo que se surta el debido control ecológico sobre los POT, no elimina ni hace inoperante el cometido estatal de la eficacia y celeridad en la función administrativa, pues el ordenamiento jurídico tiene previstas diversas alternativas de control legal -derecho de petición, sanciones disciplinarias y acciones contenciosas- que, precisamente, han sido diseñadas para asegurar el cumplimiento de los fines estatales asignados a los diferentes organismos públicos. A este respecto, no sobra recordar que, por expreso mandato Superior, los servidores públicos son responsables ante las autoridades no sólo por infringir la Constitución y la ley, sino también por "omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones".” (Sentencia C-431/00)

También se propone sustituir la fase de información por una fase de participación ciudadana, en concordancia con el valor que la Constitución Política otorga a dicha participación, en tanto uno de los pilares de nuestra organización política y eliminar obligaciones a cargo de los alcaldes que van en contravía con nuestro modelo de descentralización con autonomía municipal.

H.R. Ángela Robledo

Se propone suprimir el párrafo 6º porque se trata de un tema reglado en el Código General del Proceso y otras normas procedimentales, que debe ser analizado en cada caso, ya que la jurisdicción contencioso-administrativa puede suspender normas del Plan de Ordenamiento Territorial que sirven de soporte a la formulación de los planes parciales y con esta disposición se estaría permitiendo, de manera inconveniente que se continúen procedimientos que de conformidad con la justicia se basan en normas abiertamente ilegales o que producen perjuicios para la comunidad.